

de Apam. Hágase saber y archívese á su vez el toca.

Así lo mandaron por unanimidad de votos los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron la primera Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron. (Firmados).—*S. Lerdo de Tejada.*—*P. Ogazon.*—*J. M. Lafragua.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Azaa.*—*Luis M. Aguilar.*—Secretario.

AMPARO.

Juicio de amparo promovido ante el juzgado de Distrito de San Luis Potosí, por el ciudadano Hilario Prieto, por violacion de las garantías que otorgan los artículos 14, 16, 20 y 21 de la Constitucion Federal.

ESCRITO PRESENTADO POR EL CIUDADANO
HILARIO PRIETO.

Ciudadano Juez de Distrito:

Hilario Prieto, vecino de esta ciudad, ante V. con el debido respeto, ejercitando el recurso de amparo, comparezco y digo: que por el documento que acompaño, se impondrá, de que la junta de Diputados que se ha dado el nombre de Legislatura, me ha suspendido en los derechos de ciudadano, sin que haya dado motivo para ello, y sin que sea competente para imponer, ni esa, ni ninguna otra pena que implique verdaderamente tal nombre.

Como Diputado suplente del ciudadano Francisco Bustamante, fui llamado por los ciudadanos Antonio Quesada y Julian de los Reyes, que se titulaban Secretarios del Congreso del Estado, para que fuese á remplazar al expresado ciudadano Bustamante, á quien dicha Junta, abusando de su posición, escarnesiendo las instituciones y apoyada en una misteriosa proteccion, habia condenado á la misma pena que yo he sido sentenciado hoy. Pero como semejante pro-

cedimiento fué ejecutado por siete Diputados que no forman el *Quorum* de la II. Legislatura, y el acto era *atentatorio*, injusto y anticonstitucional, yo no quise prestarme á concurrir al Salon de Sesiones, porque mi presencia en el Congreso implicaba el reconocimiento de una corporacion viciosa en su formacion, y la calificación de legalidad, del procedimiento que privaba al propietario de ejercitar las funciones que el pueblo le habia encomendado con tanto acierto.

Me resistí, pues, manifestando que no reconocia en aquella Junta á la Legislatura legítimamente reunida, ni tampoco, postestad en ella para haber privado de la representacion popular al propietario, suspendiéndolo de los derechos de ciudadano, y de consiguiente, que no me consideraba legalmente llamado á suplir una vacante que no habia.

Esta excusa, tan legítima para todos los que quieran sujetarse á las disposiciones de la ley, fué para los ciudadanos Diputados, un acto de resistencia por mi parte; y constantes en su sistema de *arbitrariedades y extravíos*, dictaron, contra mí, la misma providencia que tomaron contra el propietario á quien deberia suplir, y contra otros propietarios que no habian concurrido á las sesiones, sin embargo de estar algunos de ellos enfermos y constar esto á los mismos ciudadanos Diputados.

Se me destituyó, pues, del derecho que tengo á representar al Partido de la Capital, y este derecho, adquirido por el sufragio del pueblo, es una propiedad de que estoy en posesion, y de la cual se me ha privado contra lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitucion General.

Se me condenó á una pena grave, porque no solamente importa la privacion de los derechos de ciudadano, sino que imprime, sobre mí individuo, la mancha de ser indigno de ejercer un empleo público; y esto se ha hecho por un Tribunal que no ha establecido la ley, infringiéndose el último miembro del artículo 14 del mismo código:

por una corporacion que no tiene mas facultades que las legislativas, infringiendo el artículo 21, y contra un simple ciudadano, pues no estando revisada mi credencial, ni habiendo ingresado al Congreso, no soy en la actualidad mas que un simple ciudadano sin propiedad en el empleo de Diputado, aunque tuviera, como tengo, la posesion del derecho de suplente; y los ciudadanos, para ser juzgados, gozan todas las garantías que comprende el artículo 20, que tambien se ha infringido; garantías que no se niegan ni á los reos que son sentenciados por sus jueces legítimos. Y como de todas ellas estoy privado por el acuerdo de los ciudadanos Diputados, que contra la ley y *revolucionariamente*, están funcionando como Legislatura:

A V. ocurro, como Juez de la Federacion, para que se sirva ampararme en el uso de las garantías consignadas en los artículos 14, 16, 20 y 21 de la referida Constitucion Federal, que han sido violadas en mi persona; declarando en debida forma, que la justicia de la Union me protege y ampara en el libre uso de ellas, para quedar expedito en el ejercicio de los derechos de ciudadano. Así es justicia, protesto lo necesario, etc.

San Luis Potosí, Octubre veintinueve de mil ochocientos setenta.—(Firmado.)—*Hilario Prieto*.

Informe de la II. Legislatura.

Legislatura del Estado de San Luis Potosí.

En sesion de hoy, la Cámara se sirvió aprobar lo siguiente:

“II. Señor.—La comision encargada de abrir dictámen sobre el oficio del ciudadano Juez de Distrito, fecha 3 del corriente, en que acompaña copia de un escrito firmado por D. Hilario Prieto y el auto que á él recayó pidiendo informe á esta Legislatura, encuentra que vituperar las irrespetuosidades que contiene el escrito del so-

licitante, y no comprendo cómo el ciudadano Juez de Distrito lo recibió en esos términos, habiendo en contra preceptos muy terminantes de las leyes y dirigiéndose al Poder Legislativo de un Estado que no está ni puede estar bajo su jurisdiccion para ningun efecto.—V. II. sabe muy bien por qué las prerogativas del ciudadano no son derechos del hombre: sabe muy bien por qué hizo una declaracion que hasta cierto punto ni necesitaba hacerla, porque la tiene hecha la ley, y la ley del Estado; es decir, la Constitucion particular que trata de los derechos del ciudadano potosino: por qué esta simple declaracion no importa aplicacion de pena y ejecucion, sino un medio á que, estando en sus facultades constitucionales, ocurrió la Legislatura para proveer á su propia existencia; y sabe tambien, que la Legislatura es irresponsable de sus actos; pero fuera de esta verdad incontestable, cree la comision, que ninguna otra cosa tiene que exponer al ciudadano Juez de Distrito.

El artículo 99 de la ley del 20 de Enero de 1869, á que se refiere el Juez, lo autoriza para pedir informe con justificacion á la autoridad que inmediatamente *ejecutare* ó *tratarse de ejecutar* el acto reclamado; es decir, á la autoridad ejecutora; y las funciones de legislar, están muy distantes de la ejecucion de sus mismos mandatos, aun cuando la ley ó acuerdo del Congreso fuesen la materia, la causa ó ocasion del acto.

Los principios mas comunes del derecho público, explican que es inherente en la naturaleza de la soberanía, no ser responsable, no estar obligada á satisfacer ningun cargo de alguna persona privada, ni entrar en litigio con ella sin su mismo consentimiento. Esta excepcion, es un atributo de la soberanía que pertenece á todos los Estados de la Union, y esa soberanía es representada por su respectiva Legislatura. La inconveniencia de sujetarse el Gobierno á perpetuos procesos como una materia de derecho, y á voluntad de cualquiera ciudadano por demanda de algun real ó supuesto agravio

ó perjuicio, se juzga mucho mayor que una positiva injuria, sostenida por un ciudadano á quien se le dilata ó rehusara la justicia. Siempre se presume que un Gobierno no tiene interés ni inclinación para hacer el mal; y las dificultades para guardarlo de las peticiones fraudulentas y embarazosas controversias, se creyó que sobrepusieran á una pura teoría de las ventajas de un sistema para la administración de la justicia universal.

No por esto se encuentra el ciudadano destituido de remedio, en el caso de que el Gobierno haya invadido sus derechos por privadas injusticias. Los inmediatos perpetradores no tienen inmunidad, y por esto á ellos se dirige el juicio de amparo, á los que puede perjudicar después.

Basta leer los artículos 19, 20, 21 y 22, sobre la ejecución de la sentencia de amparo, para convencerse que en ningún caso, ni remotamente, puede hablar la ley con el Poder Legislativo.

Suponiendo el caso de amparar á D. Hilario Prieto, obligaría el Juez á la Legislatura para que derogase su acuerdo? ¿La procesaría por no hacerlo? Declararía en buena hora que se restituyeran las cosas al estado que guardaban antes de violarse la Constitución, que es el efecto del amparo; pero para concederlo ó negarlo, nada tiene que hacer el Poder Legislativo en su carácter de tal. No es el que ha ejecutado la declaración; ni se ha presentado el caso de que por alguien llegara á ejecutarse; no es la autoridad de que trata el artículo 9º de la ley de 20 de Enero, y por tales consideraciones, la comisión no puede menos que concluir, sujetando á la aprobación de V. H. la siguiente proposición:

“Dígase al ciudadano Juez de Distrito, con referencia á su oficio fecha 3 del corriente: que no es la Legislatura del Estado la que debe dar el informe que previene el artículo 9º de la ley de 20 de Enero de 1869.”

Y tenemos la honra de insertarlo á V. para su inteligencia y demás fines corres-

pondientes.—Independencia y Libertad.—San Luis Potosí, Noviembre siete de mil ochocientos setenta.—(Firmados.)—*Julian de los Reyes*, diputado Secretario.—*Antonio Quesada*, diputado Secretario.

Pedimento del ciudadano Promotor Fiscal.

Ciudadano Juez de Distrito del Estado: El Promotor dice: que D. Hilario Prieto, solicita amparo de la Justicia de la Unión, contra la Legislatura del Estado, que por acuerdo económico de cuatro del que rige, y á virtud de haberse resistido á concurrir á sus sesiones, como suplente del propietario, diputado Francisco Bustamante, lo declaró incurso en las penas que señala la fracción 5ª del artículo 11 de la Constitución particular del Estado, por cuyo procedimiento el citado Sr. Prieto manifiesta haberse violado en su persona las garantías que otorga la carta fundamental de la Nación en sus artículos 14, 16, 20 y 21, y estar comprendido el caso en la fracción 1ª del artículo 1º de la ley de 20 de Enero del año anterior.

Ese Juzgado, por auto de tres del que rige, y con fundamento de lo que dispone el artículo 9º de la disposición últimamente citada, pidió á la Legislatura el informe que en él se previene, y negándose á producirlo, manifiesta por toda contestación, que no es la autoridad á que aquella se refiere, y estar en el caso de rendir dicho informe.

Varias son las observaciones que respectivamente se ameritan así por el peticionario como por aquella Cámara; mas como sería inútil y fuera del caso que el Ministerio se ocupara de ellas, solo se concretará á emitir su parecer someramente, en lo sustancial de la cuestión, según pasa á verificarlo.

La H. Legislatura del Estado no cree ser la autoridad que está obligada á rendir

el informe que se le tiene pedido segun el artículo 9º antes citado; y al así manifestarlo, expone, sin embargo, los motivos ó fundamentos que tuvo para declarar incurso á D. Hilario Prieto en las penas que señala la fraccion 5ª del artículo 11 de la Constitucion particular del Estado; y tal manifestacion equivale á demostrar que lo separa de su seno, á donde ella misma lo llamaba; y que si bien, no se constituia la ejecutora de tal determinacion, lo hacia, sin embargo, de una manera preventiva, privándole de ejercer sus funciones como representante del partido porque ha sido nombrado diputado suplente. En consecuencia, sea cual se quiera el carácter y espíritu con que pronunció aquella declaracion, lo hizo con toda la investidura que la caracteriza, y entretanto el quejoso se encuentra privado de esa misma representacion y de otra cualesquiera que no sea la propia y peculiar del individuo, y expuesto por lo mismo á la retraccion y aislamiento del hombre que vive fuera de sociedad.

Tal declaracion, repito, importa por otra parte, y muy principalmente, una verdadera pena, no porque ataque una propiedad ó posesion en esa representacion oficial, como malamente sostiene el Sr. Prieto, supuesto lo que dispone el artículo de la Constitucion general de la República, sino porque positivamente, la suspension ó privacion de los derechos de ciudadano, es el mal mas grave que puede pesar sobre el individuo, mayormente cuando por ella se le da á entender que es indigno de la confianza pública con que se le ha distinguido por sus comitentes.

A la vista de tales consideraciones, y teniendo presente que la Legislatura acusada, en su comunicacion de 7 del que rige, ha expuesto, no obstante su negativa, la razon, el motivo y objeto que se propuso al declarar incurso al citado Sr. Prieto, en las penas que señala la fraccion 5ª del artículo 11 antes mencionado; tal manifestacion debe considerarse y tenerse como el informe á que está obligada la autoridad contra quien se so-

licita amparo, y eso basta para que, atento el espíritu de la fraccion 1ª del artículo 19 de la ley de 20 de Enero del año anterior, se le considere como la autora del acto, que si no se ejecuta por ella, se dá lugar á ejecutarlo, y contra el que se queja el repetido Sr. Prieto.

Ese acto, pues, por otra parte, segun se ha dicho, importa una verdadera pena, que al imponerse ó declararse, se ha faltado á las prescripciones tan expresamente detalladas por la carta fundamental de la Nacion, y por las que á su vez establece la particular del Estado. El artículo 20 de la Constitucion general concede al acusado las garantías individuales, de ser oído, saber el motivo del procedimiento criminal seguido en su contra, y el que se defienda por sí ó por intervencion de otra persona de su confianza, mediante los datos que necesite y obren en el proceso. El artículo 21 del mismo código, tambien previene, que la aplicacion de las penas, propiamente tales, es exclusiva de la autoridad judicial; y la fraccion 17 del artículo 31 de la Constitucion particular del Estado, que determina las facultades del Congreso del mismo, dispone: que las declaraciones que él haga por los delitos políticos y comunes, de que sean acusados los Diputados, el Gobernador y demas, se harán en calidad de gran Jurado, expresando, si ha ó no lugar á la formacion de causa. Esto supuesto, la Legislatura acusada ha aplicado de plano y sin forma alguna de juicio, á D. Hilario Prieto, la pena de suspension de los derechos de ciudadano, sin proceder antes aquella declaracion: ha extralimitado sus facultades, invadiendo, por decirlo así, las del poder judicial, que es á quien incumbe la imposicion de la pena; y ha sentenciado en consecuencia, al Sr. Prieto, sin ser oído previamente y sin sujetarse á los fórmulas del procedimiento indispensable, que esclareciendo los hechos, vinieran á servir de base de aquella declaracion.

Esos hechos son claros y flagrantes; están confesados por la misma Legislatura en

su comunicacion de fecha 7 del que rige, y no hay necesidad de mayor prueba que los justifique, y todo persuade al Ministerio público de que se han violado, en el peticionario, las garantías individuales que otorga á los ciudadanos el artículo 20 y 21 de la Constitucion general de la República, y las concedidas en la fraccion 17 artículo 31 de la particular del Estado; por lo que, y teniendo á la vista ademas de lo expuesto, el fallo pronunciado por la Suprema Corte de Justicia con fecha 10 de Octubre pasado, en el idéntico caso ejecutado en el Distrito de Morelos, con los ciudadanos Ignacio de la Peña y Barragan y Juan de la Portilla, es de parecer que ese Juzgado declare: que la Justicia de la Union ampara y protege al ciudadano Diputado suplente Hilario Prieto, contra la declaracion de la Legislatura del Estado, que le impuso la suspension de los derechos de ciudadano, por resistirse á concurrir á sus sesiones, con infraccion notoria de las garantías que quedan expresadas.

El mismo Ministerio no cree que deben pasar desapercibidas, ciertas frases insultantes y descortesas de que usa el quejoso en su solicitud de amparo; porque si bien ha estado en su derecho para pedir lo conveniente á su defensa, esto nunca ha podido autorizarlo para que, faltando al respeto y consideraciones debidas á la autoridad contra quien ha dirigido su queja, olvide, que mientras mas digna y propia es la conducta del que se cree agraviado, mayor debe ser el valor y justa estimacion con que debe oírsele. Por lo que soy de opinion, que por ese Juzgado se manden tachar esos conceptos, advirtiendo al peticionario de tales faltas.

Sin embargo de lo expuesto, ese Juzgado dispondrá lo mas conforme á justicia.

San Luis Potosí, Noviembre catorce de mil ochocientos setenta. — (Firmado.) — *Gregorio Vazquez.*

Sentencia del ciudadano Juez de Distrito.

San Luis Potosí, Noviembre veinticuatro de mil ochocientos setenta.

Visto el juicio de amparo promovido por D. Hilario Prieto el 3 del corriente, contra la Legislatura del Estado, por creer que se han violado en su persona las garantías individuales que otorgan la Constitucion general de la República en sus artículos 14, 16, 20 y 21: Vista la contestacion dada por la Legislatura, en virtud del informe que se le pidió y el parecer del Promotor fiscal. Considerando: que en cumplimiento del artículo 9º de la ley de 20 de Enero de 1869 se pidió el informe, y aunque la citada Legislatura manifestó que no podia darlo, expuso los motivos porque habia obrado en los términos que constan en la comunicacion de fojas 13, quedando con esto obsequiada la disposicion de la ley, pues no se ha designado otra autoridad como ejecutora del acto reclamado. Considerando: que llamado D. Hilario Prieto, como Diputado suplente, para que presentando su credencial fuera revisada, se negó á concurrir, y por esto la Legislatura hizo la manifestacion que consta en la comunicacion de fojas 3, con cuyo acto cree el Sr. Prieto que se violaron las garantías que conceden los artículos antes citados. Considerando: que no ha sido violada la garantía que otorga el artículo 14, pues la Constitucion del Estado y la ley número 181 son anteriores, y por lo mismo, malamente puede decirse que si se aplican ahora tienen efecto retroactivo. Considerando: que tampoco se ha violado la garantía concedida en el artículo 16, pues el Congreso tiene derecho para pedir á los Diputados presenten sus credenciales, porque es el único que tiene facultad para decidir sobre la validez ó nulidad de ellas, y sin su presentacion no le seria posible ejercer esta facultad. Considerando: que tampoco se ha violado la garantía de que trata el artículo 20, pues no se ha formado un juicio criminal,

ni el 21 porque no se ha impuesto una pena propiamente tal, como lo asegura la misma Legislatura, sino solo se ha manifestado al Diputado que no quiere concurrir al llamamiento que se le hacia, la pena que señala el artículo 112 de la Constitución del Estado, sin que pueda entenderse que la Legislatura decidió aplicando una pena, porque esta significacion solo pueden tenerla tales frases, cuando las usa la autoridad judicial, corroborado esto con que, como manifiesta la misma corporacion, no se ha mandado ejecutar el acto, por lo que malamente puede asegurarse que perjudica al quejoso. Considerando: que no tiene razon al afirmar el Sr. Prieto que fué destituido del empleo de Diputado, porque consta lo contrario; esto es, que se le llamó para que lo ejerciera, y no queriendo concurrir, se le manifestó, explicó ó enunció la pena que la ley señala á los funcionarios de eleccion popular, que sin causa justificada faltan al desempeño de sus funciones: que el mismo peticionario asegura, que pide el amparo, porque se considera simple ciudadano, incurriendo así en una contradiccion, pues en su mismo escrito asegura que es Diputado suplente por el Partido de la Capital, y el funcionario público es á quien la Legislatura hizo la manifestacion antes indicada; facultad que concede á los Diputados presentes el artículo 25 de la Constitución del Estado, para poderlos compeler á que concurren. Considerando: que á ningun particular le es lícito decidir sobre la legalidad con que funcionan las autoridades públicas, si bien tiene derecho para no contribuir al desempeño de un encargo: que todo ciudadano debe tratar con el respeto debido á las autoridades, al que ha faltado el Sr. Prieto con las frases que quedan subrayadas en su escrito que presentó el 3 del corriente. Con fundamento de lo que disponen los artículos 101 y 102 de la Constitución general, y lo dispuesto en la ley de 20 de Enero de 1869, falló: 1º La justicia de la Union no protege ni ampara á D. Hilario Prieto, Diputado suplente por el Partido

de la Capital, contra el acuerdo de la Legislatura del Estado, en que, con objeto de compelerlo para que presentara su credencial, le manifestó las penas á que se hacen acreedores los funcionarios de eleccion popular, cuando se niegan al desempeño de su encargo: 2º Con fundamento de lo que dispone el artículo 16 de la citada ley de 20 de Enero, se impone á D. Hilario Prieto una multa de cien pesos: 3º Táchense las palabras ofensivas que ha asentado en su ocurso el Sr. Prieto, subrayándose por ahora hasta que revise el fallo la Suprema Corte de Justicia, y adviértase, que en lo sucesivo, al hablar de las autoridades, lo haga con el respeto debido: 4º Notifíquese, publíquese en los periódicos y remítase á la Suprema Corte de Justicia para su revision. El ciudadano Lic. Cipriano J. Martínez, Juez de Distrito del Estado, lo mandó y firmó. Dámos fé.—(Firmados.)—Lic. Cipriano J. Martínez.—Rafael Guzman.—Vicente Riega.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Enero diez de 1871.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, por el C. Hilario Prieto, contra la legislatura de ese Estado, por su acuerdo de 4 de Octubre próximo pasado, y por el que se declara que el promovente está incurso en las penas que señala la fraccion 5ª, artículo 11, de la Constitución local respectiva, con cuya providencia alega el C. Prieto, se han violado en su persona las garantías consignadas en los artículos 14, 16, 20 y 21 del Código fundamental de la República. Visto el informe con justificacion de que habla la ley; lo pedido por el C. promotor fiscal; la sentencia del inferior que en su parte resolutive manda: Primero: la justicia de la Union no protege ni ampara á D. Hilario Prieto, diputado suplente por

el partido de la capital, contra el acuerdo de la Legislatura del Estado, en que, con objeto de compelerlo para que presentara su credencial, le manifestó las penas á que se hacen acreedores los funcionarios de eleccion popular cuando se niegan al cumplimiento de su encargo. Segundo: con fundamento de lo que dispone el artículo 16 de la citada ley de 20 de Enero, se impone á D. Hilario Prieto una multa de cien pesos. Tercero: táchense las palabras ofensivas que ha asentado en su ocurno el Sr. Prieto, subrayándose por ahora hasta que revise este fallo la Suprema Corte de Justicia, y adviértase que en lo sucesivo, al hablar de las autoridades, lo haga con el respeto debido; con todo lo demas que de autos consta y ver convino. Considerando: que la declaracion que hizo la Legislatura de haber incurrido el C. Hilario Prieto en lo dispuesto por el artículo 11 de la la Constitucion particular del Estado no es una pena propiamente tal, porque el carácter de ésta es ser irrevocable, y el mismo C. Prieto puede hacer cesar los efectos de la declaracion de la Legislatura con solo presentarse á cumplir con su encargo de diputado, para lo cual está sin duda alguna expedito. Se declara, 1º que es de confirmarse y se confirma, la sentencia pronunciada por el C. Juez de Distrito de San Luis Potosí, pero en los términos indicados. 2º se revoca la segunda parte de la referida sentencia que condenó al C. Hilario Prieto al mínimum de la multa impuesta por el artículo 16 de la ley de 20 de Enero de 69. 3º se reforma la tercera parte de la misma sentencia, previniendo al C. Prieto, que al dirigirse á las autoridades, lo haga con el respeto debido y en los términos convenientes.

Devuélvase las actuaciones al juzgado de su origen con copia certificada de esta sentencia, para los efectos consiguientes, publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. presidente y ministros que for-

maron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—P. Ogazon.—Juan J. de la Garza.—José Simon Arteaga.—J. M. Tafraña.—P. Ordaz.—Ignacio Ramirez.—J. M. del Castillo Velasco.—M. Auza.—S. Guzman.—M. Zavala.—J. Garcia Ramirez.—Juan A. Mateos, secretario.—Es copia.—México, Febrero 4 de 1871.—Agustín Peralta, oficial mayor.

COMPETENCIA

Seguida entre el Juez de 1ª instancia de Tlaxcala y el de igual clase de Tecamahalcas de Guerrero, para conocer del juicio ejecutivo promovido por D. Agustín Leroux á D. Pascual Arenas.

PEDIMENTO DEL CIUDADANO FISCAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.

El fiscal dice: Que de las constancias que se tienen á la vista, resulta que D. Agustín Leroux demandó ejecutivamente, por mediode su apoderado el ciudadano Ramon Alavez, al de igual clase Pascual Arenas el importe de unos pagarés de desamortizacion firmados por éste, y cuya demanda se intentó ante el Juzgado de Letras de Tlaxcala.

Dichos pagarés, tenian por objeto la desamortizacion de los capitales piadosos que reconocian las Haciendas de S. Sebastian, Zumpango y la del Espíritu Santo, situadas en la municipalidad del pueblo de San Luis Teolocholco. Esto pasaba en 10 de Junio de 1867. Mas como quiera que se ignoraba el paradero del demandado, fué necesario emplazarlo por los periódicos, fijándole un tiempo para que se presentara á reconocer sus firmas, bajo el apercibimiento legal. En cinco periódicos de Tlaxcala y Puebla se hizo el emplazamiento y se fijó el término de quince dias.

Pasados éstos, sin que el emplazado compareciera, se presentó de nuevo el actor en